

29ª REUNION — Continuación de la 10ª SESION ORDINARIA — JULIO 22 DE 1987

Presidencia de los señores diputados Roberto Pascual Silva
y Jorge Reinaldo Vanossi

Secretarios: doctor Carlos Alberto Bravo y señor Carlos Alberto Béjar

Prosecretarios: señores Hugo Belnicoff y Ramón Eladio Naveiro

MINISTRO PRESENTE:
de Salud y Acción Social,

doctor CONRADO HUGO STORANI

DIPUTADOS PRESENTES:

ABDALA, Luis Oscar
ABDALA, Oscar Tupic
AGUILAR, Ramón Rosa
ALBERTI, Lucía Teresa N.
ALBORNOZ, Antonio
ALENDE, Oscar Eduardo
ALSOGARAY, Alvaro Carlos
ALSOGARAY, María Julia
ALTERACH, Miguel Ángel
ALLEGRONE de FONTE, Norma
ARAMBURU, José Pedro
ARRECHEA, Ramón Rosaura
ARSÓN, Héctor Roberto
AUSTERLITZ, Federico
AUYERO, Carlos
AVALOS, Ignacio Joaquín
AZCONA, Vicente Manuel
BAKIRDJIAN, Isidro Roberto
BARBEITO, Juan Carlos
BARRENO, Rómulo Víctor
BERNASCONI, Tulio Marón
BERRI, Ricardo Alejandro
BIANCIOOTTO, Luis Fidel
BIANCHI de ZIZZIAS, Elia A.
BIELICKI, José
BISCIOTTI, Victorio Osvaldo
BLANCO, Jesús Abel
BLANCO, José Celestino
BONINO, Alberto Cecilio
BORDÓN GONZÁLEZ, José O.
BRIZ de SANCHEZ, Onofre
BRIZUELA, Delfor Augusto
BRIZUELA, Guillermo Ramón
BRIZUELA, Juan Arnaldo
BRUNO, Ángel Atilio José
BULACIO, Julio Segundo
CAMISAR, Osvaldo
CANATA, José Domingo
CANGIANO, Augusto
CANTOR, Rubén
CARDOZO, Ignacio Luis Rubén
CARMONA, Jorge

CARRANZA, Florencio
CARRIZO, Raúl Alfonso Corpus
CASTILLO, Miguel Ángel
CASTRO, Juan Bautista
CAVALLARI, Juan José
CLÉRICI, Federico
CORNAGLIA, Ricardo Jesús
CORTESE, Lorenzo Juan
COSTANTINI, Primo Antonio
CURATOLO, Atilio Arnold
DALMAU, Héctor Horacio
DELFINO, Jorge Raúl
DE LA VEGA de MALVASIO, Lily M. D.
DEL RIO, Eduardo Alfredo
DE NICHILLO, Cayetano
DÍAZ, Manuel Alberto
DÍAZ de AGÜERO, Dolores
DI CÍO, Héctor
DIGÓN, Roberto Secundino
DIMASI, Julio Leonardo
DOUGLAS RINCÓN, Guillermo F.
ESPINOZA, Nemecio Carlos
FALCIONI de BRAVO, Ivelise I.
FAPPIANO, Oscar Luján
FINO, Torcuato Enrique
FURQUE, José Alberto
GARAY, Nicolás Alfredo
GARCÍA, Roberto Juan
GARGIULO, Lindolfo Mauricio
GAY, Armando Luis
GIMÉNEZ, Jacinto
GIMÉNEZ, Ramón Francisco
GINZO, Julio José Oscar
GOLPE MONTIEL, Néstor Lino
GÓMEZ MIRANDA, María F.
GONZÁLEZ, Héctor Eduardo
GONZÁLEZ, Joaquín Vicente
GOROSTEGUI, José Ignacio
GRIMAUX, Arturo Aníbal
GUATTI, Emilio Roberto
GUELAR, Diego Ramiro
GUZMÁN, Horacio
HORTA, Jorge Luis
HUARTE, Horacio Hugo
IBÁÑEZ, Diego Sebastián
IGLESIAS VILLAR, Teófilo
INGARAMO, Emilio Felipe
JANE, Miguel

JAROSLAVSKY, César
LAZCOZ, Hernaldo Efraín
LEMA MACHADO, Jorge
LENCINA, Luis Ascensión
LÉPORI, Pedro Antonio
LESCANO, David
LESTELLE, Eugenio Alberto
LÓPEZ, Santiago Marcelino
LUGONES, Horacio Emerico
LLORENS, Roberto
MACAYA, Luis María
MAC KARTHY, César
MANZANO, José Luis
MANZUR, Alejandro
MARINI, Norberto Enrique
MARTINEZ MARQUEZ, Miguel J.
MASINI, Héctor Raúl
MATZKIN, Jorge Rubén
MELÓN, Alberto Santos
MILANO, Raúl Mario
MIRANDA, Julio Antonio
MONSERRAT, Miguel Pedro
MOTHE, Félix Justiniano
MULQUI, Hugo Gustavo
NEGRI, Arturo Jesús
NIEVA, Próspero
ORTIZ, Pedro Carlos
PAPAGNO, Rogelio
PARENTE, Rodolfo Miguel
PATIÑO, Artemio Agustín
PEDRINI, Adam
PELÁEZ, Anselmo Vicente
PELLIN, Osvaldo Francisco
PEPE, Lorenzo Antonio
PERA OCAMPO, Tomás Carlos
PEREYRA, Pedro Armando
PÉREZ, René
PIUCILL, Hugo Diógenes
POSSE, Osvaldo Hugo
PUPILLO, Liborio
PURITA, Domingo
RABANAQUE, Raúl Octavio
RAPACINI, Rubén Abel
RATKOVIC, Milivoj
REALI, Raúl
REYNOSO, Adolfo
RÍQUEZ, Félix
REZEK, Rodolfo Antonio

RODRIGO, Juan
 RODRÍGUEZ, José
 RODRÍGUEZ ARTUSI, José Luis
 ROJAS, Ricardo
 ROMANO NORRI, Julio César A.
 SALTO, Roberto Juan
 SARQUIS, Guillermo Carlos
 SILVA, Carlos Oscar
 SILVA, Roberto Pascual
 SOCCHI, Hugo Alberto
 SORIA ARCK, José María
 STAVALE, Juan Carlos
 STOLKINER, Jorge
 STORANI, Conrado Hugo
 STUBBIN, Marcelo
 SUÁREZ, Lionel Armando
 ULLOA, Roberto Augusto
 USIN, Domingo Segundo
 VACA, Eduardo Pedro
 VAIRETTI, Cristóbal Carlos
 VANOLI, Enrique Néstor
 VANOSSI, Jorge Reinaldo
 VIDAL, Carlos Alfredo
 YUNES, Jorge Omar
 ZAFFORE, Carlos Alberto
 ZAVALEY, Jorge Hernán
 ZINGALE, Felipe
 ZUBIRI, Balbino Pedro

AUSENTES, EN MISION OFICIAL:

CASTIELLA, Juan Carlos
 ELIZALDE, Juan Francisco C.

AUSENTES, CON LICENCIA:

ALAGIA, Ricardo ¹ lberto ¹
 ALTAMIRANO, Amado Héctor H. ¹
 BERCOVICH RODRÍGUEZ, Raúl ¹
 BONIFASI, Antonio Luis ¹
 BORDA, Osvaldo
 BOTTA, Felipe Esteban. ¹
 CABELLO, Luis Victorino ¹
 CONTRERAS GÓMEZ, Carlos A. ¹
 COPELLO Norberto Luis ¹

CORZO, Julio César ¹
 D'UD, Ricardo ¹
 DE LA SOTA, José Manuel ¹
 DOMÍNGUEZ FERREYRA, Dardo N. ¹
 DOVENA, Miguel Dante ¹
 ENDEIZA, Eduardo A. ¹
 FERRÉ, Carlos Eduardo ¹
 GARCÍA, Carlos Euclides ¹
 GEFARDUZZI, Mario Alberto ¹
 GONZÁLEZ CABANAS, Tomás W. ¹
 GOTTI, Erasmo Alfredo ¹
 GRACISO, Carlos Alfredo ¹
 IRIGOYEN, Roberto Osvaldo ¹
 JUEZ PÉREZ, Antonio ¹
 LAMBERTO, Oscar Santiago ¹
 MACEDO de GÓMEZ, Blanca A. ¹
 MARTÍNEZ, Luis Alberto ¹
 MASSEI, Oscar Ermelindo ¹
 NATALE, Alberto A. ¹
 PÉREZ VIDAL, Alfredo ¹
 PERL, Néstor ¹
 PIERRI, Alberto Reinaldo ¹
 PRONE, Alberto Josué ¹
 PUGLIESE, Juan Carlos ¹
 RAMOS, Daniel Omar ¹
 RAUBER, Cleto ¹
 RIUTORT de FLORES, Olga E. ¹
 SAMMARTINO, Roberto Edmundo ¹
 SELLA, Orlando Enrique ¹
 SERI ALTA, Miguel Jorge ¹
 SOLARI BALLESTEROS, Alejandro ¹
 SPINA, Carlos Guido ¹
 SRUR, Miguel Antonio ¹
 TELLO ROSAS, Guillermo Enrique ¹
 TOMA, Miguel Angel ¹
 TORRES, Manuel ¹
 TORRESAGASTI, Adolfo ¹
 TRIACA, Alberto Jorge ¹
 ZOCCOLA, Eleo Pablo ¹

¹ Solicitud pendiente de aprobación de la Honorable Cámara.

AUSENTES, CON AVISO:

ALDERETE, Carlos Alberto
 ARBOLAZA, Marcelo Miguel
 BAGLINI, Raúl Eduardo
 BELARRINAGA, Juan Bautista
 BELLO, Carlos
 BIANCHI, Carlos Humberto
 CÁCERES, Luis Alberto
 CAFERRI, Oscar Néstor
 CAFIERO, Antonio Francisco
 CAPUANO, Pedro José
 CARIGNANO, Raúl Eduardo
 CAVALLARO, Antonio Gino
 COLLANTES, Genaro Aurelio
 CONNOLLY, Alfredo Jorge
 DRUETTA, Raúl Augusto
 DUSSOL, Ramón Adolfo
 FLORES, Aníbal Fulglio
 GAZIANO, Rubén Alberto
 GIACOSA, Luis Rodolfo
 GONZÁLEZ, Alberto Ignacio
 GUZMAN, María Cristina
 IGLESIAS, Herminio
 L. URUME, José Luis
 LOSADA, Mario Aníbal
 MAGLIETTI, Alberto Ramón
 MASSACcesi, Horacio
 MAYA, Héctor María
 MEDINA, Alberto Fernando
 MOREAU, Leopoldo Raúl
 MOREYRA, Omar Demetrio
 PUEBLA, Ariel
 RIGATUSO, Tránsito
 RODRÍGUEZ, Jesús
 SABADINI, José Luis
 SÁNCHEZ TORANZO, Nicasio
 STORANI, Federico Teobaldo M.
 TERRILE, Ricardo Alejandro
 TORRES, Carlos Martín

SUMARIO

1. Continúa la **consideración** de los dictámenes de mayoría y minoría de las comisiones de Asistencia Social y Salud Pública, de Previsión y Seguridad Social, de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se establece el régimen legal de las obras sociales (26-P.E.-87). (Pág. 2844.)
2. Salutación de la Presidencia con motivo de hallarse presenciando la sesión el vicepresidente de la Asamblea Nacional de Senegal, señor Imaïla Diagne. (Página 2887.)
3. Continúa la **consideración** del asunto al que se refiere el número 1 de este sumario. Se sanciona —con modificaciones— el proyecto de ley contenido en el dictamen de mayoría. (Pág. 2887.)
4. **Apéndice:**

A. Sanciones de la Honorable Cámara. (Pág. 2898.)
 B. Inserciones. (Pág. 2904.)

—En Buenos Aires, a los veintidós días del mes de julio de 1987, a la hora 16 y 22:

1

REGIMEN LEGAL DE LAS OBRAS SOCIALES

Sr. Presidente (Vanossi). — Continúa la sesión.

Prosigue la consideración en general de los dictámenes de mayoría y minoría de las comisiones de Asistencia Social y Salud Pública, de Previsión y Seguridad Social, de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se establece el régimen legal de las obras sociales (expediente 26-P.E.-87).¹

Tiene la palabra el señor diputado por Santiago del Estero.

Sr. Aguilar. — Señor presidente: una vez más me dirijo a esta Honorable Cámara para hacer algunas reflexiones sobre este tema tan caro a

¹ Véase el texto de los dictámenes en el Diario de Sesiones del 16 y 17 de julio de 1987, pág. 2803.

clara el respectivo acuerdo ante la Dirección Nacional de Obras Sociales.

Art. 42. — A partir de la fecha de promulgación de la presente ley las funciones y atribuciones previstas para la Dirección Nacional de Obras Sociales serán asumidas por el Instituto Nacional de Obras Sociales

(INOS), hasta tanto se reglamente esta ley y comience a funcionar el nuevo organismo.

Art. 43. — Deróganse las leyes 18.610, 22.269, decretos y toda otra disposición que se oponga a lo regulado por la presente ley.

Art. 44. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

B. INSERCIONES

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO CAMISAR¹

El Proyecto de Unificación Legislativa Civil y Comercial. Su coordinación con recomendaciones de congresos jurídicos y soluciones del derecho comparado

Por ROBERTO MANUEL LÓPEZ CABANA.

El derecho civil (es) el derecho privado, fundamental y común a todos los derechos privados. De ahí que no haya cómo rebatir propiamente a los que lo equiparan al derecho privado. En su fondo es el derecho privado. (Alfredo Colmo, *Técnica legislativa del Código Civil argentino*, 2ª edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1961, página 163.)

1º — *Propósito.* Este trabajo se propone demostrar que el proyecto de unificación de la legislación civil y comercial, en pleno trámite parlamentario, responde al reclamo, no sólo de una calificada doctrina —aisladamente considerada—, sino también de los más diversos congresos, conferencias y jornadas de carácter jurídico, nacionales e internacionales en que nuestro país participó, y concuerda con las soluciones que tienen mayor arraigo en el derecho comparado.

Por lo demás, resulta grato destacar que este aporte se hace posible en atención a la saludable metodología adoptada por la Comisión Legislativa, de difundir su proyecto y consultarlo previamente a la comunidad, antes de su tratamiento en el Congreso.

Por ello, como adhesión a los criterios del proyecto, que comparto, en cuanto pretende reflejar en la legislación una realidad ya existente, he asumido la tarea de señalar su coordinación con otras legislaciones y con despachos, recomendaciones y ponencias de los congresos y jornadas, cuyas conclusiones no tienen toda la difusión que merecen.

Entiendo poner así en evidencia la preocupación que se advierte por lograr soluciones con el consenso implicado en las concordancias halladas.

2º — *La unificación de la legislación civil y comercial.* Segovia, nuestro primer comentarista integral de la legislación de derecho privado sancionada durante el siglo pasado, aludía ya a la tendencia de "fusionar los derechos civil y comercial", calificándola en 1889, como moderna.

Circunstancias históricas singulares permitieron a nuestro país contar con legislación civil y comercial

unificada, a través del Código de Comercio, sancionado para la provincia de Buenos Aires en 1859, y adoptado por la Nación en 1862, que rigió, en soledad, hasta la entrada en vigencia, en 1871, del Código Civil.

Es a partir de entonces que comienza una difícil convivencia entre normas sólo justificadas en el Código de Comercio por la necesidad de reglar un derecho común que no estaba todavía contenido en el Código Civil, y que entran en colisión desde su misma sanción.

Es más propio del Código Civil, derecho común por excelencia, contener la única y verdadera *lex generalis*, sincerando nuestro sistema que mantiene unas pocas normas dispersas e inconexas de considerable vetustez, bajo la denominación de "Código de Comercio" asimilándolas en la ley común, y respetando la vigencia de las normas especiales representativas de estatutos que deben conservarse como tales.

La inconveniencia de mantener un doble régimen civil y comercial fue denunciada insistentemente por la doctrina, que puso el acento en proclamar la necesidad de unificar el régimen de las obligaciones y contratos, como paso previo a la unificación del derecho privado interno que algunos, con mayor optimismo y visión de futuro, proyectan a todo el continente americano.

En esa perspectiva pueden mencionarse: la 8ª Conferencia Panamericana de Lima (1938), y las conferencias interamericanas de abogados de Río de Janeiro (1943), México (1944), Santiago de Chile (1945), Lima (1947) y Detroit (1949).

En nuestro país se comenzó reclamando la unificación de las obligaciones civiles y comerciales en el I Congreso Nacional de Derecho Comercial (1940), opinión reflejada en las Jornadas franco-latinoamericanas de Derecho Comparado (Montevideo, 1948), y que es reiterada en la VI Conferencia Nacional de Abogados (La Plata, 1959) propiciando un código único de derecho privado, y singularmente en el III Congreso Nacional de Derecho Civil (Córdoba, 1961). Las propuestas, con diferente alcance, se repiten en el Congreso Nacional de Derecho Comercial (Rosario, 1969), en la Mesa Redonda sobre Unificación de los Derechos Civil y Comercial (Universidad de Belgrano, 1979), III Congreso de Derecho Societario (Salta, 1982), Conferencia Nacional de Abogados y Facultades de Derecho (Rosario, 1982), Congreso Argentino de Derecho Comercial (Buenos Aires, 1984), Mesa Redonda sobre Unificación de las obligaciones Civiles y Comerciales (Instituto Argentino de Derecho Comercial y Colegio de Escribanos de la Capital Federal, 1986) y en las Jornadas Nacionales sobre Unificación de las Obligaciones Civiles y Comerciales (Buenos Aires, 1986).

¹ Solicitada por el señor diputado Camisar y aprobada por la Honorable Cámara durante la sesión del 15 de julio de 1987, esta inserción se publica en el presente número del Diario de Sesiones en razón de no haber llegado a la Secretaría en tiempo oportuno para su inclusión en el número correspondiente a la citada sesión.

Puede citarse, como el más ambicioso proyecto internacional de unificación, el concretado por Francia e Italia en 1927.

Legislativamente, el criterio unificador en materia de obligaciones ha sido adoptado por Suiza (1881), Turquía (1926), Túnez (1906), Marruecos (1912), Líbano (1934), Polonia (1934), Madagascar (1966), Senegal (1967), y comprendiendo materia civil y comercial, los códigos civiles de Italia (1942), Unión Soviética (1964) y Paraguay (1987), y los códigos únicos en lo Civil y Comercial de China (Taiwan) y del reino de Tailandia, agregándose a la nómina la obra codificadora denominada *Principios generales del derecho civil* de la República Popular China, de 1987.

3º — *Responsabilidad de las personas jurídicas*. Las VI Jornadas de Derecho Civil (Santa Fe, 1977) declararon que la responsabilidad indirecta de la persona jurídica por acto de sus dependientes debe coincidir con la que se atribuye a las personas físicas.

Es la solución del artículo 34, inciso 2º, del proyecto.

4º — *Domicilio*. El artículo 23 del Código Civil suizo autoriza la pluralidad de domicilios cuando se desarrollan actividades industriales o comerciales.

Es lo previsto en el artículo 94 del proyecto.

5º — *Emancipación*. El derecho comparado adopta generalmente la edad de 18 años para asignar capacidad, según lo dispone el derecho vigente en: Australia, Bahamas, la mayoría del Canadá (Quebec, Alberta, Manitoba, Ontario, Prince Edward, Saskatchewan, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, Estados Unidos de América (salvo en Colorado, Mississippi, Missouri, Nebraska, Pennsylvania, Wyoming y en Puerto Rico), España, Finlandia, Francia, Guatemala, Inglaterra, Irlanda del Norte, Israel, Italia, Líbano, México, Noruega, Pakistán, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana, Suecia, Unión Soviética, Yugoslavia.

Grecia exige 22 años, Austria, Japón, Nueva Zelandia y Paraguay 20 y Alemania, Escocia, India y algunos estados de Estados Unidos (Alabama, Nebraska, Wyoming) 19.

Siguiendo el criterio más difundido, aunque con una solución más moderada, el proyecto otorga la emancipación automática a los 18 años (artículo 131), de manera que si bien toda incapacidad pendiente cesa a los 21 años (artículo 128), entretanto subsisten para el emancipado las limitaciones de los artículos 134 y 135 —que ya existían en el Código— y 168, que resulta de la ley de matrimonio civil 23.515.

El IV Congreso Nacional de Derecho Civil (Córdoba, 1969) propició, en cuanto a la emancipación: que fuera regla la capacidad del emancipado, que se equiparara la emancipación por habilitación de edad a la emancipación por matrimonio, y que se modificaran coherentemente los artículos 306, inciso 4º, y 455 inciso 2º del Código Civil.

Es lo proyectado en los artículos 131, 306, inciso 4º, y 455, inciso 2º.

6º — *Unificación de la responsabilidad civil contractual y extracontractual*. Tal unificación viene siendo reclamada insistentemente en la Argentina, desde hace más de un cuarto de siglo: III Congreso Nacional de Derecho Civil (Córdoba, 1961); V Jornadas de Derecho Civil (Rosario, 1971); Jornadas Australes de De-

recho (Comodoro Rivadavia, 1980); II Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial y Procesal Civil (Junín, provincia de Buenos Aires, 1986); III Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil (San Juan, 1986); Jornadas Nacionales sobre Unificación de las Obligaciones Civiles y Comerciales (Buenos Aires, 1986).

En derecho comparado esta unificación ha sido realizada en leyes modernas: Checoslovaquia (Códigos de 1950 y 1964), Senegal (Código de 1967), Yugoslavia (ley de 1978), Quebec (Código de 1980); asimismo resulta de las convenciones de Varsovia (1929) y de Bruselas (1961) sobre transporte marítimo internacional, del Convenio de Europa de 1977, y de los proyectos de directivas del Consejo de las Comunidades Europeas de 1976 y 1985, y de la Ley Modelo Uniforme norteamericana de 1979, sobre responsabilidad por productos.

El proyecto adecua a ese temperamento a través de la derogación del artículo 1.107 y de los nuevos textos que asigna a los artículos 520, 521, 522, 906 y 3.933 del Código Civil. De esa manera contempla también estos conceptos:

- a) La subsistencia de la causalidad adecuada como módulo de la extensión del deber de reparar, afirmada por las II Jornadas de Derecho Civil (Corrientes, 1965) y las II Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial y Procesal Civil (Junín, provincia de Buenos Aires, 1986);
- b) El criterio general de que la atribución objetiva de responsabilidad tiene iguales alcances: VII Jornadas de Derecho Civil (Buenos Aires 1979); Jornadas Australes de Derecho (Comodoro Rivadavia, 1980) y II Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial y Procesal Civil (Junín, provincia de Buenos Aires, 1986);
- c) La indemnización del daño moral en cualquier obligación y ante todo factor de atribución, como lo recomendaron las V Jornadas de Derecho Civil (Rosario, 1971); las VII Jornadas de Derecho Civil (Buenos Aires, 1979); las Jornadas Australes de Derecho (Comodoro Rivadavia, 1980), y las II Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil (San Juan, 1984); el carácter resarcitorio de su indemnización, que predicaron las II Jornadas Sanjuaninas citadas; y la eliminación de la discrecionalidad del juez para condenar a su resarcimiento en las obligaciones contractuales (conf. II Jornadas Sanjuaninas citadas);
- d) La fijación de un plazo quinquenal común de prescripción, con antecedente en el artículo 2.947 del Código italiano, que lo asigna genéricamente a la responsabilidad extracontractual.

7º — *Incumplimiento sin culpa*. Las II Jornadas Sanrafaelinas de Derecho Civil (San Rafael, Mendoza, 1971) declararon que entre el caso fortuito y la culpa hay una zona intermedia —la falta de culpa— que debe ser claramente distinguida.

El proyecto agrega un segundo párrafo al artículo 514, definiendo el incumplimiento sin culpa, del que luego se hace expresa mención en el artículo 1.625, inciso 2º.

8º — *Responsabilidad precontractual*. Las II Jornadas de Derecho Civil (Corrientes, 1965), reclamaron la existencia de criterios legales para la responsabilidad precontractual.

El proyecto los da en los artículos 1.158 y 1.159, y en la definición de daño al interés negativo del artículo 520.

9º — *Obligaciones dinerarias*. Las Jornadas sobre Indexación en el Derecho Argentino y Comparado (Rosario, 1976), declararon la procedencia del reajuste de la obligación dineraria toda vez que exista depreciación. Las I Jornadas de Abogados sobre temas de Derecho Civil (Rosario, 1982) consideraron "admisible la pretensión autónoma de revisión de los contratos por causa de inflación". Las I Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil (San Juan, 1982) aceptaron específicamente su actualización exista o no mora o retardo del deudor, temperamento que fue reiterado en las III Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil (San Juan, 1986).

El artículo 619 del proyecto propicia la recomposición del valor de la deuda dineraria desde el simple retardo del deudor, con fórmula ya utilizada por Vélez Sarsfield en el artículo 659.

10. — *Riesgo de la cosa y actividades riesgosas*. Las I Jornadas Provinciales de Derecho Civil (Mercedes, provincia de Buenos Aires, 1981), se hicieron cargo de las actividades riesgosas con utilización de cosas; el IV Congreso Nacional de Derecho Civil (Córdoba, 1969), de las cosas peligrosas por su naturaleza o por la forma de su utilización; y las II Jornadas de Derecho Civil (Corrientes, 1965), de la noción de actividades peligrosas por su naturaleza o por la de los medios empleados. La atribución objetiva al daño proveniente de actividades riesgosas —y no sólo del riesgo o vicio de la cosa contemplado por la ley 17.711— es legislada en los artículos 2.050 del Código italiano de 1942, 955/998 del Código boliviano de 1975, 1970 y 1972 del Código peruano de 1984, y 1846 del Código paraguayo de 1987.

Por otro lado, ordinariamente el resarcimiento es tarifado hasta cierto límite, lo cual suele no constituir impedimento para la reparación integral cuando también concurre un sustento subjetivo de la responsabilidad: el tarifamiento resulta de la ley 9.688 de accidentes de trabajo; del Código Aeronáutico (ley 17.285); de la Convención de Varsovia de 1929 según Protocolo de La Haya de 1929 (ley 17.386) para la aeronavegación internacional; de la Ley de Navegación 20.094; de la Convención de Viena sobre Accidentes Nucleares de 1963 (ley 17.048); del Proyecto de Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas de 1976; del Convenio del Consejo de Europa de 1977; de la Ley de Medicamentos alemana de 1976; de la Ley Modelo Uniforme norteamericana de 1979. Las I Jornadas Provinciales de Derecho Civil (Mercedes, provincia de Buenos Aires, 1981), estimaron que el daño proveniente del riesgo es estadísticamente previsible; pero el aseguramiento de quien lo introduce en la sociedad, para salvaguardar los intereses de las víctimas, no es viable si no se establece un *quantum* indemnizatorio, según criterio de las Jornadas Australes de Derecho (Comodoro Rivadavia, 1980) y de las IV Jornadas Rioplatenses de Derecho (Punta del Este, Uruguay, 1986), que coincide con los fundamentos de la solución concordante

del Proyecto de Convención Europea de 1976 y de la Ley Uniforme norteamericana de 1979.

La importancia del seguro ha sido encomiada reiteradamente, sosteniéndose la necesidad de seguros obligatorios para el desarrollo de múltiples actividades, como los que existen para el caso de muerte de trabajadores en relación de dependencia (decreto 1.794/74), o para los accidentes nucleares (ley 17.048); actividades o cosas riesgosas en general (II Jornadas de Derecho Civil, Corrientes, 1965); accidente de tránsito (II Jornadas de Derecho Civil cit., I Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial y Procesal Civil (Junín, provincia de Buenos Aires, 1984); comercialización de productos (IV Jornadas Rioplatenses de Derecho, Punta del Este, Uruguay, 1986), en especial farmacéuticos (I Jornadas sobre Responsabilidad Civil por Productos Farmacéuticos y Medicinales, Morón, provincia de Buenos Aires, 1986); contaminación ambiental (IX Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, 1983).

En otro aspecto de la cuestión, se sostiene que, en materia de atribución por riesgo, para liberarse de responsabilidad es menester la prueba de la interrupción del nexo causal (Jornadas sobre Responsabilidad Civil, Rosario, 1986), y que tienen tal entidad el caso fortuito extraño a la cosa o actividad (V Jornadas Sanrafaelinas de Derecho Civil, San Rafael, Mendoza, 1978) y el propio hecho de la víctima (II Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial y Procesal Civil, Junín, provincia de Buenos Aires, 1986).

El proyecto asume esas soluciones al reformar el artículo 1.113:

- a) Incluyendo en la atribución objetiva el daño proveniente de actividades que sean riesgosas por su naturaleza o por las circunstancias de su realización, en vez del estrecho riesgo o vicio de la cosa que contempló la ley 17.711;
- b) Precizando el concepto de causa ajena al riesgo o vicio, en lugar de la fórmula culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder que trajo la ley 17.711;
- c) Tarifando el máximo indemnizatorio, sin perjuicio de dar lugar a la reparación plena cuando el demandado no prueba haber obrado sin culpa, o se trata de un caso en que, razonablemente, habría debido tomar un seguro. El monto previsto para cada damnificado directo, que fija en 2.000 pesos argentinos oro, sigue los criterios del Código Aeronáutico y de la Ley de la Navegación en cuanto asumen esa unidad de cuenta, cuya cotización, dada por el Banco Central de la República Argentina, aparece en los diarios y equivale actualmente a $\$$ 125 la unidad (17 de junio de 1987); 2.000 pesos argentinos oro son, pues $\$$ 250.000.

La atribución objetiva también está prevista en los artículos 1.118, 1.119, 2.176, 2.183, 2.203, 2.234 y 2.238 del proyecto, e implicada por otros (por ejemplo, artículo 2.619).

Los estatutos legales particulares —y no el Código Civil— son el ámbito propio para regular pormenorizadamente las actividades riesgosas en aspectos singu-

lares de la teoría de la responsabilidad, eventuales seguros forzosos, y mecanismos de prevención; de tutela que frecuentemente se incluyen en el derecho comparado y que aparecen en el proyecto de ley del consumidor aprobado por el Senado el 29/10/86.

11. — *Daños al consumidor.* Se ha propiciado que esté regida por el factor de atribución objetiva (IV Jornadas Rioplatenses de Derecho, Punta del Este, Uruguay, 1986), y que el damnificado tenga acción contra los diversos intervinientes en el proceso de industrialización y comercialización (IV Jornadas Rioplatenses de Derecho, citadas), criterio que proviene del Proyecto de Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas de 1976, del Convenio del Consejo de Europa de 1977, de la Ley Modelo Uniforme norteamericana de 1979, de la reciente ley española de 1984. Asimismo se predica que todos los obligados lo son concurrentemente, cuando no solidariamente: VIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, La Plata, provincia de Buenos Aires, 1981; Proyectos de Directivas del Consejo de las Comunidades Europeas de 1976 y de 1985; Convenio del Consejo de Europa de 1977; Ley de Medicamentos alemana de 1979.

El proyecto al formular un agregado al artículo 2.176, brinda una solución que coincide con esos antecedentes.

12. — *Responsabilidad colectiva.* La incriminación de todos los integrantes de un grupo que realizan actividades riesgosas para los demás fue propiciada por las V Jornadas de Derecho Civil (Rosario, 1971) y las II Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial y Procesal Civil (Junín, provincia de Buenos Aires, 1986). Especialmente se lo reclamó para los daños provenientes de productos (IV Jornadas Rioplatenses de Derecho, Punta del Este, Uruguay, 1986) y derivados de la contaminación ambiental (IX Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, 1983).

El proyecto incorpora la responsabilidad colectiva en el artículo 1.119, previendo el factor de atribución objetivo.

En el artículo 1.118 ajusta el texto del 3º párrafo del Código Civil, siguiendo el criterio del artículo 2.328 del Código chileno, seguido por los Códigos colombiano (artículo 2.355), salvadoreño (artículo 2.079), ecuatoriano (artículo 2.255) y uruguayo (artículo 1.330).

13. — *Daño ecológico.* Como criterio general, se ha propiciado ampliar la legitimación activa, incluyendo a los cuerpos intermedios representativos de la comunidad interesada (II Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil, San Juan, 1984); en semejante orden de ideas, para el caso de contaminación ambiental, las IX Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, 1983) recomendaron otorgarla a "cualquier integrante de la comunidad", lo cual adecua a las ideas del I Congreso Católico de Abogados de la República Argentina (Buenos Aires, 1980), que consideró ilegítimo afectar las condiciones de vida de la persona, perjudicando su desarrollo integral, y propició el dictado de leyes protectoras del medio ambiente.

El proyecto, al incluir el artículo 2.619, extiende la protección que el artículo 2.618 sólo otorga a los titulares de "inmuebles vecinos" a "toda persona que pueda ser perjudicada" por actividades contaminantes del medio ambiente.

14. — *Formación del contrato.* La Argentina ratificó por ley 22.765 la Convención de Viena de 1980 sobre compraventas internacionales, que será vinculante desde el año 1988 en virtud de que, con la ratificación hecha por Italia en diciembre de 1986, se han contemplado las necesarias al efecto.

Esa Convención:

- a) Adopta la teoría de la recepción en lugar de la teoría de la expedición asumida por el artículo 1.154 del Código Civil;
- b) Precisa el concepto de recepción, sea de la oferta, sea de la aceptación;
- c) Asume la tecnología actual, considerando el caso de las personas físicamente distantes pero comunidades instantáneamente entre sí;
- d) Moderniza el concepto de oferta;
- e) Permite al aceptante introducir útilmente ciertas modificaciones a la oferta, contrariamente a lo previsto por el artículo 1.152 del Código Civil;
- f) Autoriza al oferente a prevalerse de una aceptación tardía;
- g) Considera las "prácticas" de la negociación como categoría distinta de los usos y costumbres.

El proyecto incorpora esos criterios en los artículos 1.144, 1.147, 51, 1.154 y 1.197, inciso 2º d); coloca así la teoría general del contrato en concordancia sustancial con las ideas actuales del derecho comparado, si bien no se limita a trasegar indiscriminadamente —o indiscretamente— todas las soluciones de la Convención.

15. — *Integración del contrato.* El artículo 219 del Código de Comercio prevé la integración del contrato con "lo que es de uso y práctica".

La viabilidad de la integración del contrato ha sido propiciada —en un caso puntual, pero con criterio extensible— por las II Jornadas Provinciales de Derecho Civil (Mercedes, provincia de Buenos Aires, 1983).

El artículo 1.155 del proyecto prevé adecuadamente la integración del contrato con las normas imperativas —en sustitución de las cláusulas incompatibles—, las supletorias, y los usos y costumbres. Esto —cabe agregar— aparecen incorporados al artículo 16, en armonía con el artículo 17 del Código Civil y conforme a las exigencias de los párrafos II y V del Título Preliminar del Código de Comercio.

16. — *Contratos de contenido predispuesto o sometidos a condiciones generales. Contratos por adhesión.* Su problemática ha sido contemplada por varios códigos (italiano, egipcio, alemán oriental, etíope, ruso, boliviano de 1975), y por diversas leyes especiales a partir de la israelí de 1964, sueca, alemana federal, francesa, finlandesa, holandesa.

Asimismo, con particular intensidad, por las VIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil (La Plata, provin-

cia de Buenos Aires, 1981) y las Jornadas sobre Responsabilidad Civil (Rosario, 1986).

Algunas soluciones propiciadas por esos y otros congresos jurídicos, y resultantes de leyes especiales, son éstas:

- a) La invalidez de las cláusulas que desnaturalizan la esencia del vínculo obligacional, afectan la libertad contractual o la buena fe, o importan abuso del derecho (Jornadas sobre Responsabilidad Civil citadas);
- b) La invalidez de las cláusulas que limitan la responsabilidad, en especial en cuanto no exista una contrapartida económica justificante de esa renuncia (Jornadas sobre responsabilidad civil citadas);
- c) La prevalencia de los efectos normales de los contratos consagrados por normas dispositivas regulatorias de los contratos típicos sobre las condiciones generales (VIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, citadas);
- d) La necesidad de firma expresa de las condiciones generales (V Jornadas Sanrafaelinas de Derecho Civil, San Rafael, Mendoza, 1978; conforme artículo 14 de la ley 19.724 de prehorizontalidad), aunque tal firma no es por sí sola suficiente (II Jornadas Provinciales de Derecho Civil, Mercedes, provincia de Buenos Aires, 1983 y Jornadas sobre Responsabilidad Civil citadas);
- e) La inoponibilidad de las cláusulas no legibles (II Jornadas Provinciales de Derecho Civil citadas), en tanto el artículo 11 de la ley 17.048 de seguros y el artículo 14 de la ley 19.724 de prehorizontalidad exigen "redacción clara y fácilmente legible";
- f) La necesidad de evitar condiciones generales "sorpresivas", exigiendo que el no predisponente las conozca efectivamente si se hallan en instrumento separado (VIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil citadas);
- g) La prevalencia de las cláusulas especiales sobre las generales y la de las incorporadas sobre las preexistentes (VIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil citadas);
- h) En caso de ambigüedad, la interpretación en contra del predisponente (VIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil citadas; II Jornadas Provinciales de Derecho Civil citadas);
- i) La inequivalencia de las condiciones generales a los usos y costumbres (VIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil citadas);
- j) La interpretación favorable a la mayor equivalencia de las contraprestaciones, recomendándose incorporar al Código Civil el principio de protección de la parte más débil (II Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Corrientes, 1965).

El proyecto contempla adecuadamente todos estos criterios, en los artículos 1.157, 1.197, inciso 3º; y 1.197, inciso 2º f). Asimismo descarta las cláusulas limitativas de responsabilidad en los supuestos de los artículos 2.186, 2.235 y 2.239 y, decide en el artículo 3.900 la indisponibilidad de las reglas sobre prescripción.

17. — *Doctrina de la imprevisión.* La viabilidad de la acción por reajuste en el caso del artículo 1.198 del Código Civil ha sido sostenida reiteradamente: IV Jornadas Sanrafaelinas de Derecho Civil (San Rafael, Mendoza, 1976); II Jornadas Rioplatenses de Derecho (Punta del Este, Uruguay, 1977); I Jornadas Provinciales de Derecho Civil (Mercedes, provincia de Buenos Aires, 1981); I Jornadas de Abogados sobre temas de Derecho Civil (Rosario, 1982).

El proyecto, al modificar el artículo 1.198, acepta esa opinión dominante.

18. — *Excepción de incumplimiento.* El código brasileño, en su artículo 1.092, después de prever la excepción de incumplimiento contractual, con parecida normativa a nuestro artículo 1.201, sanciona, en un segundo párrafo, el derecho de quien está obligado a cumplir con la primera prestación, a diferirla —cuando sobreviniere una importante disminución del patrimonio de la otra parte que comprometiére, o tornare dudosa la prestación a la que se obligó— hasta tanto satisfaga la que le compete, o dé garantía suficiente de cumplir con la prestación. En sentido concordante se expiden los códigos portugués (artículo 429) y griego (artículo 377).

Dos aplicaciones específicas de esta imposición legal de afianzar una prestación surgen de lo dispuesto por los artículos 1.419 y 2.002 del Código Civil.

El proyecto da respuesta a esta necesidad con la norma contenida en el 2º párrafo del artículo 1.201 y la consiguiente derogación de los artículos 1.419 y 2.002 (que resulta reemplazado).

19. — *Resolución contractual.* Se ha considerado la facultad comisorio como tácitamente incluida en los contratos y "elemento natural de éstos" (III Jornadas Provinciales de Derecho Civil, Mercedes, provincia de Buenos Aires, 1986), y a las reglas que en las disposiciones relativas a cada uno de los contratos se refieren al pacto comisorio como prevalentes sobre la regla general establecida por el artículo 1.204 del Código Civil (IV Jornadas Científicas de la Magistratura Argentina, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, 1980). La acción de resolución está prevista en el Código Civil, en forma específica, en los artículos 605, 610/12, 580 y 582, 1.328, 2ª parte, 1.412, 1.413, 1.519, 1.524, 1.559, 1.563, 1.564, 1.567, 1.579, 1.602, 1.643, 1.644, 1.735, incisos 1º, 2º y 4º, 1.849, 1.858, 1.862, 888/889, 2.164, 2.172, 2.174, 2.180, 1.366/67, 1.369, etcétera. La prevalencia de estas normas singulares torna innecesario conceder "plazo de gracia" para la resolución, en caso de facultad implícita. En este sentido son concordantes los códigos chileno (artículo 1.489), colombiano (artículo 1.546), brasileño (artículo 1.092), portugués (artículo 432), del Distrito Federal mexicano (artículo 1.949), alemán (párrafo 325 y 326), guatemalteco (artículo 1.535) y en el *Restatement of contracts* (artículo 274).

El artículo 1.204 del proyecto, al considerar implícita la facultad resolutoria, elimina el "plazo de gracia" con duración fijada en la ley, de modo coherente con la legislación comparada citada y la interpretación recomendada aludida.

Se ha propiciado que, en caso de resolución contractual queden firmes las prestaciones cumplidas de modo parcial, recíproco y equivalente (V Jornadas Sanrafaelinas de Derecho Civil, San Rafael, Mendoza, 1978); VI Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Santa Fe, 1977), y que la cláusula penal compensatoria sea útil para fijar la indemnización (V Jornadas Sanrafaelinas de Derecho Civil citadas).

Ambas soluciones resultan adoptadas por el artículo 1.203, inciso 1º, del proyecto.

20. — *Compraventa*. Se sostuvo la procedencia de derogar el inarmónico inciso 3º del artículo 1.375 del Código Civil (IV Jornadas Científicas de la Magistratura, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, 1980), así como regular el *leasing* con legislación no detallista, que le asigne carácter de derecho real, que prevea la inscripción registral del contrato, y que disponga la oponibilidad al concurso de la opción de compra (III Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil, San Juan, 1986).

El proyecto acepta esos criterios en los artículos 1.345 y 1.346, con sus remisiones a los artículos 1.344 y 1.337, de los cuales resulta la adquisición de un dominio imperfecto (revocable), oponible en cuanto promedie publicidad registral.

21. — *Inscripción registral*. Se ha sostenido la conveniencia de ampliar los casos de registración (IV Jornadas Sanrafaelinas de Derecho Civil, San Rafael, Mendoza, 1976; III Jornadas Rioplatenses de Derecho, San Isidro, provincia de Buenos Aires, 1981), la inoponibilidad a terceros de las mutaciones jurídico-reales no inscriptas (IX Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, 1983), y el carácter imperfecto del dominio revocable o resoluble, resultante de una condición resolutoria explícita, de una cláusula resolutoria legal o de un plazo resolutorio, cuya oponibilidad a terceros interesados de buena fe, en caso de cosas registrables, exige la inscripción (IX Jornadas Nacionales de Derecho Civil citadas), en tanto los terceros no son de buena fe si conocen o deben conocer la posibilidad de resolución por los antecedentes del dominio (V Jornadas Sanrafaelinas de Derecho Civil, San Rafael, Mendoza, 1978).

El proyecto, en los artículos 1.346 y 2.671, prevé —coherentemente— la inoponibilidad de la revocación del dominio frente a terceros interesados de buena fe y a título oneroso, cuando ha sido omitida la registración legalmente impuesta.

22. — *Unificación de las sociedades*. Las IX Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, 1983), recomendaron unificar el régimen de sociedades, con una parte general aplicable a todas ellas y —en opinión dividido— tomar como base la sociedad de personas, flexibilizando las normas de la forma colectiva “en miras a dar mayor cabida a la autonomía de la voluntad”.

El proyecto mantiene la ley 19.550 de sociedades, que atañe a las sociedades *típicas*, incluye en el Código Civil (artículos 1.648/1.680) la regulación de “toda sociedad, en cuanto no sea incompatible con las reglas especiales aplicables a las mismas” (artículo 1.648, y aplica las normas de esa sociedad *común* (no típica) “a toda sociedad que no presente los requisitos especiales de otra sociedad establecida por la ley” (artículo 1.652).

Esta regulación básica, que da amplia cabida a la autonomía de la voluntad, viene fundamentalmente trasegada del Código suizo de las Obligaciones (artículos 530/551).

23. — *Representación y mandato*. Se ha recomendado:

- a) Independizar la teoría general de la representación y del poder (II Jornadas de Derecho Civil, Corrientes, 1965);
- b) Diferenciar al poder del mandato como contrato (III Jornadas de Derecho Civil, Tucumán, 1967; V Jornadas Sanrafaelinas de Derecho Civil, San Rafael, Mendoza, 1978);
- c) La forma escrita para el poder para suscribir boleto de compraventa inmobiliaria (V Jornadas Sanrafaelinas citadas; II Jornadas Provinciales de Derecho Civil, Mercedes, provincia de Buenos Aires, 1983);
- d) El deber del mandatario de requerir nuevas instrucciones frente a circunstancias imprevistas (V Jornadas Sanrafaelinas de Derecho Civil citadas);
- e) La indemnizabilidad en caso de revocación del mandato oneroso limitado en el tiempo u otorgado para determinados actos (III Jornadas de Derecho Civil, Tucumán 1967);
- f) La ineficacia del asentimiento general anticipado, y el consiguiente poder, a los fines del artículo 1.277 del Código Civil (V Jornadas de Derecho Civil, Rosario, 1971).

El proyecto refleja esos criterios en los artículos 1.869 y siguientes, en especial en los artículos 1.882, 1.886, incisos 5º, 1.903, inciso 2º y 1.911.

24. — *Corretaje*. Se considera que el corretaje, como acercamiento de las partes para que ellas contraten, es distinto del apoderamiento (V Jornadas Sanrafaelinas de Derecho Civil, San Rafael, Mendoza, 1978; II Jornadas Provinciales de Derecho Civil, Mercedes, provincia de Buenos Aires, 1983), y que la reglamentación de sus aspectos profesionales corresponde a las autoridades locales conforme a los artículos 104, 105 y concordante de la Constitución Nacional (V Jornadas Sanrafaelinas de Derecho Civil citadas).

Ambos criterios han sido adoptados por los artículos 2.013, 2.014 y 2.017, inciso 4º del proyecto.

25. — *Enriquecimiento sin causa*. El IV Congreso Nacional de Derecho Civil (Córdoba, 1969), recomendó incorporar al Código una norma que consagrara el principio general que lo veda y el carácter subsidiario de la acción *in rem verso*. Propició asimismo la autonomía de la gestión de negocios y la absorción del empleo útil.

Los Códigos iberoamericanos de más reciente sanción le han dado cabida al principio, y lo han admitido como procedente sólo cuando el perjudicado no dispone de otra acción (Código boliviano de 1975, artículos 961/962; peruano de 1984, artículos 1.954/1.955; paraguayo de 1987, artículos 1.817/1.818).

Los artículos 2.306/2.310 del proyecto aceptan los criterios expuestos.

26. — *Voluntad unilateral*. Una característica definida de los Códigos de Latinoamérica es la admisión expresa

de la voluntad unilateral como fuente de obligaciones, con una regulación específica: la tendencia fue iniciada por el Código brasileño (artículo 1.505 y siguientes) y continuada por los Códigos peruano de 1936, y de 1984 (artículos 1.956 y siguientes), del Distrito Federal mexicano (artículos 1.860 y siguientes), boliviano de 1975 (artículo 955 y siguientes).

El proyecto regula expresamente la voluntad unilateral a partir del artículo 2.288, así como en los artículos 1.145 y 1.153.

27. — *Propiedad horizontal*. Las II Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil (Mercedes, provincia de Buenos Aires, 1983) señalaron la personalidad jurídica del consorcio conforme al principio de especialidad, el carácter accesorio de las unidades complementarias, y la necesidad de posibilitar la incorporación al sistema de los clubes de campo, parques industriales, complejos turísticos o residenciales y afines.

El proyecto da respuesta a esas inquietudes: artículos 2.617 y 34, inciso 3º.

28. — *Derecho de superficie*. Las II Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial y Procesal Civil (Junín, provincia de Buenos Aires, 1986), reclamaron la regulación del espacio aéreo y del derecho a sobre-elevar, en el régimen de la propiedad horizontal. Las X Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Corrientes, 1985), recomendaron la incorporación al Código Civil del derecho real de superficie, señalando las bases de su regulación.

La legislación comparada admite el derecho de superficie, como derecho real: Italia, en su Código Civil de 1942, artículos 952/956 y ley 865 de 1971; Alemania, en el BGB, párrafos 1.012/1.017 y reglamento del 15/1/19; Suiza, como derecho de servidumbre, Código Civil, artículos 675 y 779; Bélgica, ley del 10/1/1924; Holanda, como derecho real, en su Código Civil; Austria, Código Civil, artículo 1.125 y ley del 26/4/12; Japón, Código Civil, artículos 265/269-2; China (Taiwan), Código Civil de 1929, artículos 832/841; Etiopía, Código Civil de 1960, artículos 1.214/1.215; Portugal, Código Civil, artículo 1.524 y siguientes.

El proyecto incluye el derecho de superficie en el *numerus clausus* del artículo 2.503, y regula el derecho real de superficie en el extenso y completo artículo 2.614.

29. — *El principio de especialidad en la garantía real*. Las VII Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Buenos Aires, 1979), declararon que la cláusula de estabilización del crédito garantizado no afecta el principio de especialidad, y esas mismas Jornadas, continuando el criterio de las Jornadas sobre Indexación en el Derecho Argentino y Comparado (Rosario, 1976), consideraron que el *plus* por depreciación monetaria está incluido en la garantía real.

Es la solución de los artículos 3.210 y 3.879, inciso 1º del proyecto.

30. — *Cesión de derechos hereditarios*. Las I Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil (San Juan, 1982), sostuvieron que la cesión de derechos hereditarios debe ser realizada por escritura pública, no suple por acta judicial ni por instrumento privado reconocido. Asimismo, que su oponibilidad a terceros impone un mecanismo de registración.

El proyecto asume el primero de esos criterios en los artículos 1.184, inciso 6º y 1.443, y en este último prevé la necesidad de inscripción de los bienes registrables incluidos en la cesión de derechos hereditarios.

31. — *Prescripción*. Las III Jornadas Rioplatenses de Derecho (San Isidro, provincia de Buenos Aires, 1981), consideraron que los nuevos plazos legales deben ser aplicados a las prescripciones ya comenzadas, que el artículo 4.051 del Código Civil se refiere al derecho patrio anterior y a la antigua legislación española, y las VII Jornadas de Derecho Civil (Buenos Aires, 1979), que el plazo de prescripción liberatoria corre desde la exigibilidad. El IV Congreso Nacional de Derecho Civil (Córdoba, 1969), declaró que la "constitución en mora" aludida en el artículo 3.986 del Código debía entenderse como "requerimiento de pago".

El proyecto atiende ambas sugerencias: en el artículo 8º de la ley y en los artículos 3.904, 3.911, inciso 5º, del Código.

32. — *Teoría de la apariencia*. Las X Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Corrientes, 1985), consideraron que la protección de la apariencia —situación de hecho notoria y objetivamente idónea, frente a un tercero de buena fe que, obrando con la debida diligencia no conoce ni puede conocer la verdadera situación— es un principio de derecho.

El proyecto privilegia la apariencia, en ese sentido, en los artículos 1.147, inciso 1º, y 1.874/1875.

33. — *Facultades de los jueces. La equidad*. Las II Jornadas Científicas de la Magistratura Argentina (Santa Fe, 1977), declararon —con referencia a la ley 17.711— que la extensión de las atribuciones judiciales adecua a la Constitución Nacional, y la acentuación del predominio de la regla moral es congruente con los principios de su Preámbulo, señalando además "el uso prudente que se ha hecho de las mismas por la judicatura argentina".

El proyecto, con sus constantes referencias a las circunstancias del caso, a lo que es razonable, a lo que resulta de los usos, a la buena fe, y demás conceptos afines, permite soluciones de equidad, concebidas como las que son justas en la relación jurídica dada. Vélez Sarsfield coincidía con esos conceptos, cuando escribió la nota al artículo 2.567: "En nuestro país los jueces ordinarios tienen por las leyes las mismas facultades que las Cortes de equidad".